

Tratamiento y Cesiones de datos por imperativos legales. Informe 0039/2007

La consulta plantea una serie de cuestiones relativas a la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, a distintos supuestos en que, según se indica, las Cajas de Ahorros se encuentran obligadas por imperativo de diversas normas legales al tratamiento y, en su caso, cesión de determinados datos de carácter personal relativos a la actividad de distintas personas que prestan sus servicios en las mismas. En particular, se plantea si dichos supuestos de tratamiento o cesión se encuentran amparados en lo dispuesto en los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica, así como si procede la aplicación del artículo 5.5 de la misma, quedando excluidas las Cajas del cumplimiento del deber de informar a los afectados, dado que los tratamientos y cesiones se encuentran previstos en normas con rango de Ley.

A fin de dar una adecuada respuesta a las cuestiones planteadas, se procederá en primer lugar a analizar la legitimidad para el tratamiento y cesión, en su caso, de los datos a los que se refiere la consulta, procediendo a continuación al estudio de la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999.

II

Como bien se indica en la consulta, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone, con carácter general, que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Por su parte, en lo relativo a las cesiones de datos, dispone el artículo 11.1 que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, si bien el consentimiento no será preciso cuando una norma con rango de Ley habilite la cesión, conforme a lo establecido en el artículo 11.2 a) de la propia Ley Orgánica.

En consecuencia, siempre que el tratamiento se encuentre habilitado por una norma con rango de Ley o por una norma de derecho comunitario de aplicación directa, a la que será aplicable el principio de primacía reiteradamente manifestado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades, cabrá considerar el tratamiento amparado por los preceptos citados, no precisándose del consentimiento del afectado, sin perjuicio de lo que resulte aplicable en relación con el deber de informar.

Dicho esto, procederá ahora analizar si esta circunstancia concurre en cada uno de los supuestos objeto de la consulta.

1. En cuanto a la inclusión en el Reglamento interno de los datos referidos a los posibles conflictos de intereses de los empleados y familiares, el

artículo 67.2 de la Ley 24/1988 impone determinados requisitos a las entidades que pretendan obtener autorización como empresas de servicios de inversión. No obstante, el artículo 65 de la Ley parece excluir este requisito para las Cajas de Ahorro, al señalar que “Las entidades de crédito, aunque no sean empresas de servicios de inversión según esta Ley, podrán realizar habitualmente todas las actividades previstas en su artículo 63, siempre que su régimen jurídico, sus estatutos y su autorización específica las habiliten para ello”, por lo que las mismas no precisarán la obtención de la autorización a la que el precepto se refiere.

No obstante, el artículo 78.1 de la Ley 24/1988 sí establece una serie de obligaciones dirigidas a “Las empresas de servicios de inversión, las entidades de crédito, las instituciones de inversión colectiva, los emisores, los analistas de inversiones en valores e instrumentos financieros y, en general, cuantas personas o entidades ejerzan, de forma directa o indirecta, actividades relacionadas con los mercados de valores”, por lo que sí resultarán aplicables a las Cajas de Ahorro.

Según dicho precepto, las Cajas deberán respetar “Los códigos de conducta que, en desarrollo de las normas a que se refiere el párrafo a) anterior, apruebe el Gobierno o, con habilitación expresa de éste, el Ministro de Economía, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, refiriéndose el apartado a) a “Las normas de conducta contenidas en el presente Título”

Como se indica en la consulta, en desarrollo de esta previsión, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo impone a estas entidades la obligación de llevar a cabo un reglamento interno en que se hagan constar como obligaciones la de “recabar información de sus empleados acerca de los posibles conflictos de interés a que estén sometidos por sus relaciones familiares, su patrimonio personal o por cualquier otra causa, así como mantener actualizada dicha información”.

Por este motivo, el tratamiento por las cajas de estos datos se encontrará amparado por lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con el artículo 78.1 b) de la Ley 24/1988.

2. Por lo que respecta a la inclusión de determinadas operaciones de los administradores y de los miembros de las comisiones de control en el informe de buen gobierno corporativo, la disposición adicional segunda de la Ley 26/2003 establece en su apartado 1 que “Las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores deberán hacer público con carácter anual un informe de gobierno corporativo”.

Además, el precepto prevé varios supuestos de cesión de los datos contenidos en el informe, al añadir que “El informe anual de gobierno corporativo será objeto de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acompañando copia del documento en que conste. La Comisión Nacional del Mercado de Valores remitirá copia del informe comunicado al

Banco de España y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas”.

Por último, también se prevé la cesión genérica de los datos contenidos en el informe, al señalarse que “El informe será objeto de publicación como hecho relevante y se incluirá en la página web de la citada entidad”.

Pues bien, según dispone el apartado 2, el informe deberá incorporar la siguiente información:

- a) Estructura de administración de la entidad, con información de las remuneraciones percibidas por el Consejo de Administración, la Comisión de Control, la Comisión de Retribuciones y la Comisión de Inversiones, computando tanto las dietas por asistencia a los citados órganos como los sueldos que se perciban por el desempeño de sus funciones, así como a las remuneraciones análogas a las anteriores y las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida. También se incluirán toda clase de remuneraciones percibidas por los miembros de los órganos de gobierno y personal directivo, derivadas de la participación en representación de las cajas de ahorros en sociedades cotizadas o en otras entidades en las que la caja tenga una presencia o representación significativa, en representación de la caja de ahorros.
- b) Operaciones efectuadas, ya sea directamente o a través de entidades dotadas, adscritas o participadas, con descripción de sus condiciones, incluidas las financieras, con los miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros y familiares en primer grado y con empresas o entidades en relación con las que los anteriores se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, referido a los grupos de entidades.

De este modo, la recogida de los datos que deberán constar en el informe de gobierno corporativo, así como las cesiones de los datos relacionadas expresamente en el apartado 1 de la Disposición adicional se encontrarán amparadas por los artículos 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en relación con el apartado 2 de la citada disposición adicional segunda de la Ley 26/2003.

3. En cuanto a las operaciones relacionadas con partes vinculadas, el artículo 35, párrafo cuarto de la Ley 24/1988 dispone que “Las sociedades emisoras de valores admitidos a negociación en algún mercado secundario oficial deberán incluir necesariamente en las informaciones semestrales a que se refiere el párrafo segundo del presente artículo, información cuantificada de todas las operaciones realizadas por la sociedad con partes vinculadas en la forma que determine el Ministerio de Economía o, con su habilitación expresa,

la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con indicación del tipo y naturaleza de las operaciones efectuadas y de las partes vinculadas que han intervenido en ellas. No obstante, el Ministerio de Economía determinará las operaciones sobre las que habrá de facilitarse información individualizada, en caso de que aquéllas fueran significativas por su cuantía o relevantes para una adecuada comprensión de los estados financieros de la sociedad. Asimismo, el Ministerio de Economía determinará reglamentariamente o, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las operaciones vinculadas sobre las que no habrá que facilitar información, fundado en causa legítima”.

Por su parte, el Reglamento 1725/2003 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2003, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, establece en su artículo 2 que el mismo “será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado Miembro”.

Dicho Reglamento introduce la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 24), sobre información a revelar respecto a partes vinculadas, habiendo sido la redacción de dicho apartado modificada por el Reglamento 2238/2004 de la Comisión, de 29 de diciembre de 2004.

Según la citada Norma en su apartado 9 “Una parte se considera vinculada con la entidad si dicha parte:

- (a) directa, o indirectamente a través de uno o más intermediarios:
 - (i) controla a, es controlada por, o está bajo control común con, la entidad (esto incluye dominantes, dependientes y otras dependientes de la misma dominante);
 - (ii) tiene una participación en la entidad que le otorga influencia significativa sobre la misma; o
 - (iii) tiene control conjunto sobre la entidad;
- (b) es una asociada (según se define en la NIC 28 Inversiones en entidades asociadas) de la entidad;
- (c) es un negocio conjunto, donde la entidad es uno de los partícipes (véase la NIC 31 Intereses en negocios conjuntos);
- (d) es personal clave de la dirección de la entidad o de su dominante;
- (e) es un familiar cercano de una persona que se encuentre en los supuestos (a) o (d);
- (f) es una entidad sobre la cual alguna de las personas que se encuentra en los supuestos (d) o (e) ejerce control, control conjunto o influencia significativa, o bien cuenta, directa o indirectamente, con un importante poder de voto; o
- (g) es un plan de prestaciones post-empleo para los trabajadores, ya sean de la propia entidad o de alguna otra que sea parte vinculada de ésta”.

Al propio tiempo, el citado apartado define el concepto de familiares cercanos, estableciendo que “son aquellos miembros de la familia que podrían

ejercer influencia en, o ser influidos por, esa persona en sus relaciones con la entidad. Entre ellos se pueden incluir:

- (a) el cónyuge o persona con análoga relación de afectividad y los hijos;
- (b) los hijos del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad;
- (c) las personas a su cargo o a cargo del cónyuge o persona con análoga relación de afectividad”.

Según disponen los apartados 1 a 4 de esta Norma:

“1. El objetivo de esta Norma es asegurar que los estados financieros de una entidad contengan la información necesaria para poner de manifiesto la posibilidad de que tanto la posición financiera como el resultado del ejercicio, puedan haberse visto afectados por la existencia de partes vinculadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendientes con ellas.

2. Esta Norma será aplicable en:

- (a) la identificación de relaciones y transacciones entre partes vinculadas;*
- (b) la identificación de los saldos pendientes entre una entidad y sus partes vinculadas;*
- (c) la identificación de las circunstancias en las que se exige revelar información sobre los apartados (a) y(b) anteriores; y*
- (d) la determinación de la información a revelar sobre todas estas partidas.*

3. Esta Norma exige revelar información sobre las transacciones con partes vinculadas y los saldos pendientes con ellas, en los estados financieros separados de una dominante, un partícipe en un negocio conjunto o un inversor, elaborados de acuerdo con la NIC 27 Estados financieros consolidados y separados.

4. Las transacciones y los saldos pendientes con otras entidades del grupo que sean partes vinculadas, se revelarán dentro de los estados financieros de la entidad. Las transacciones intragrupo entre partes vinculadas, así como los saldos pendientes con ellas, se eliminarán en el proceso de elaboración de los estados financieros consolidados del grupo.”

A la vista de todo ello, el tratamiento y comunicación de datos se encontrará amparada en los artículo 6.1 y 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con las normas citadas.

4. Por lo que respecta al tratamiento de los datos de los altos cargos de las entidades, el artículo 7 de la Ley 31/1995, de 2 de agosto dispone que "Los Consejeros Generales deberán reunir los siguientes requisitos:

- a) Ser persona física, con residencia habitual en la región o zona de actividad de la Caja.
- b) Ser mayor de edad y no estar incapacitado.

- c) Tener la condición de impositor de la Caja de Ahorros a que se refiera la designación, con una antigüedad superior a dos años en el momento de la elección, así como, indistintamente, un movimiento o un saldo medio en cuentas no inferior a lo que se determine en las normas que desarrollen la presente Ley, al tiempo de formular la aceptación del cargo, en el caso de ser elegido en representación del grupo de los impositores.
- d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran contraído con la Caja de Ahorros por sí mismos o en representación de otras personas o entidades.
- e) No estar incurso en las incompatibilidades reguladas en el artículo 8.

El artículo 15 añade que “Los vocales del Consejo de Administración deberán reunir los mismos requisitos que se establecen en el artículo 7 respecto de los Consejeros Generales, y ser menores de setenta años en el momento de la toma de posesión, salvo que la legislación de desarrollo de la presente Ley establezca un límite de edad distinto”.

Por último, el artículo 23 dispone que “Los Comisionados deberán reunir los mismos requisitos y tendrán las mismas incompatibilidades y limitaciones que los Vocales del Consejo de Administración, salvo el representante de la Comunidad Autónoma, que tendrá sólo las mismas incompatibilidades y limitaciones”

Los artículos 8, 16 y 24, a los que se refiere la consulta establecen el régimen de incompatibilidades aplicable a cada uno de los supuestos señalados, respectivamente.

De este modo, será preciso que las Cajas puedan conocer la concurrencia en las personas a las que se refieren los artículos que han venido siendo citados, por lo que el tratamiento de los datos se encontraría amparado por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

En todo caso, debe recordarse que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, por lo que el tratamiento deberá limitarse a lo que sea imprescindible para la comprobación de la concurrencia de los requisitos a los que venimos refiriéndonos.

III

En cuanto a la aplicación del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, la Agencia Española de Protección de Datos, en informe de 8 de noviembre de 2004, tiene declarado lo siguiente:

“El artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 viene a establecer un deber impuesto en general a los responsables de los tratamientos, de tal suerte que, en principio, será necesario informar al afectado del tratamiento de sus datos de carácter personal, tanto en los supuestos en que el mismo cuenta con el consentimiento del mismo como en los casos en que el tratamiento se encuentra habilitado por otras causas admitidas por el artículo 6 de la propia Ley.

Según lo dispuesto en el propio artículo 5, el cumplimiento de dicho deber debería ser inmediato en caso de que los datos fueran recogidos de los afectados o verificarse en el plazo de tres meses desde la recogida, si el origen de los datos no fuera el propio afectado.

No obstante, esta regla admite determinadas excepciones o matizaciones para supuestos excepcionales. Así, en caso de que los datos no sean recogidos directamente de los afectados, el artículo 5.5 establece en su párrafo primero que “No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley lo prevea, cuando el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias”.

*El precepto transcrito tiene su origen en lo establecido en el artículo 11.2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de la que la Ley Orgánica 15/1999 es transposición al Ordenamiento español. Según dicho precepto “Las disposiciones del apartado 1 (referido al deber de información en caso de recogida de los datos de fuentes distintas al propio afectado) no se aplicarán, en particular para el tratamiento con fines estadísticos o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados **o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley.** En tales casos, los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas”.*

De este modo, una interpretación coherente del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, a la vista de lo establecido en la Directiva 95/46/CE de que trae causa, implica que el deber de información al afectado quedará exceptuado en los supuestos en que el tratamiento o cesión de datos venga expresamente regulado en una norma con rango de Ley.

(...)

En todo caso, es preciso aclarar que la aplicación de la excepción del artículo 5.5 a la que venimos refiriéndonos en este caso será aplicable a

supuestos como el aquí analizado, en que el tratamiento o cesión de los datos de carácter personal aparece recogido **expresamente** en una norma con rango de Ley, pero no a aquellos supuesto en que la Ley “autorice” o “habilite” la cesión de los datos, pero no la recoja de modo expreso y taxativo en su articulado, sin perjuicio de que en dichos supuestos la cesión se encontrará amparada por lo dispuesto en los artículos 6.2 u 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999.

En el sentido que se ha descrito se ha pronunciado ya la Agencia Española de Protección de Datos en resolución de 8 de octubre de 2004, en la que se señala:

“El artículo 5.5 también exceptúa de la obligación de informar cuando expresamente una Ley lo prevea. De la interpretación literal del artículo resultaría que la obligación de informar debe estar expresamente exceptuada en una Ley para que se cumplan las condiciones previstas en este supuesto. Sin embargo la Directiva 95/46/CE, que ha sido traspuesta por la Ley 15/1999, en su artículo 11.2 especifica que no existe deber de informar en particular para el tratamiento con fines estadísticos o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley, por lo que ha de interpretarse este supuesto de exclusión en los términos previstos en la Directiva, quedando excluida la obligación de informar cuando la cesión de datos esté expresamente prevista en una Ley”

Aplicando la doctrina que acaba de indicarse al presente supuesto cabe apreciar que la exigencia expresa de tratamiento o cesión de datos únicamente viene recogida en los apartados 2 y 3 de la consulta, sin perjuicio de la existencia en los restantes de una norma con rango de Ley que habilite el tratamiento o cesión, por lo que únicamente quedarán las Cajas exoneradas del deber de información en los ya mencionados apartados segundo y cuarto de la consulta.